



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

RESOLUCIÓN No. 3254

POR EL CUAL SE ABRE UNA INVESTIGACIÓN, SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES

LA DIRECTORA LEGAL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus facultades delegadas mediante la Resolución 110 de 2007 de la Secretaría Distrital de Ambiente, en concordancia con el Decreto 1594 de 1984, la Ley 99 de 1993, el Decreto 948 de 1995, la Resolución 556 de 2003, el Acuerdo Distrital 257 de 2006, el Decreto Distrital 561 de 2006, y

CONSIDERANDO

Que mediante requerimiento identificado con el radicado No. 2007EE38342 del 27 de noviembre de 2007, la Oficina de Control de Emisiones y Calidad del Aire de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de esta Entidad, solicitó a la empresa de transporte **COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES**, identificada con NIT. 830.092.800-0, domiciliada en la Calle 67 B No. 62-21, piso 2, Localidad de Barrios Unidos de esta Ciudad, la presentación de 51 vehículos afiliados a su empresa, con el fin de efectuar la prueba de emisión de gases, los días 10, 13, 19, 22 y 27 de diciembre de 2007, en el punto fijo de control ambiental ubicado en la Calle 56 A No. 23-65 sur.

Que el 29 de noviembre de 2007, fue entregado el oficio de requerimiento a la empresa COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES, tal como lo demuestra el sello de recibido impuesto por la citada empresa en la copia del oficio de requerimiento, el cual obra en las presentes diligencias.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que de la verificación del cumplimiento al requerimiento No. 2007EE38342 del 27 de noviembre de 2007, realizado a la empresa COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES, la Oficina de Control de Emisiones y Calidad del Aire de la Dirección de Evaluación, Control y



Seguimiento Ambiental, emitió el Concepto Técnico No. 001731 de 30 de enero de 2008, en el cual se expresa lo siguiente:

"(...)

4. RESULTADOS

Los siguientes son los resultados de los vehículos requeridos que se presentaron y se revisaron a la Empresa COOTRANSINTEGRALES.

Tabla No. 1. Resultados vehículos requeridos Empresa COOTRANSINTEGRALES

REQUERIDOS	ASISTIERON	APROBADOS	RECHAZADOS	% APROBACIÓN	% RECHAZO
51	28	20	8	71.42%	28.58%

Tabla No. 3 (sic) Vehículos requeridos y no presentados sin justificación

VEHICULOS QUE NO ATENDIERON SOLICITUD		
No.	REQUERIDOS	FECHA
1	BLG843	DICIEMBRE 10 DE 2007
2	BKV610	DICIEMBRE 10 DE 2007
3	QHV113	DICIEMBRE 10 DE 2007
4	BIU332	DICIEMBRE 10 DE 2007
5	BJU750	DICIEMBRE 13 DE 2007
6	SQK185	DICIEMBRE 13 DE 2007
7	BGL166	DICIEMBRE 13 DE 2007
8	BJJ792	DICIEMBRE 13 DE 2007
9	BGG828	DICIEMBRE 13 DE 2007
10	BGK131	DICIEMBRE 13 DE 2007
11	BDG849	DICIEMBRE 13 DE 2007
12	SOC071	DICIEMBRE 13 DE 2007
13	SKM430	DICIEMBRE 19 DE 2007
14	SQL035	DICIEMBRE 19 DE 2007
15	BLV870	DICIEMBRE 19 DE 2007
16	CIH997	DICIEMBRE 22 DE 2007
17	VKH200	DICIEMBRE 22 DE 2007
18	SGG987	DICIEMBRE 22 DE 2007



19	BFX241	DICIEMBRE 22 DE 2007
20	SYT827	DICIEMBRE 22 DE 2007
21	SKZ803	DICIEMBRE 27 DE 2007
22	BKU610	DICIEMBRE 27 DE 2007
23	SKL742	DICIEMBRE 27 DE 2007

Tabla No. 4 Porcentaje de inasistencia de vehículos requeridos a Empresa COOTRANSINTEGRALES

PORCENTAJE DE INASISTENCIA		
REQUERIDOS	INASISTENCIA	% DE INASISTENCIA
51	23	45.09%

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que la Resolución 556 del 7 de Abril de 2003, expedida conjuntamente por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, hoy Secretaría Distrital de Ambiente, y por la Secretaría de Tránsito y Transporte, hoy Secretaría Distrital de Movilidad, se constituye como la herramienta fundamental para el control en materia de emisiones de gases contaminantes de fuentes móviles en Bogotá, D.C., en consideración a los elevados niveles de contaminación que soporta la Ciudad.

Que en desarrollo de lo anterior, tanto la Secretaría Distrital de Ambiente como la Secretaría Distrital de Movilidad, podrán solicitar a las entidades oficiales, privadas, empresas de transporte público o propietarios particulares, la presentación de alguno o algunos de los vehículos de su propiedad, contratados o afiliados, para efectuar una prueba de emisión de gases, en la fecha y lugar que para ello disponga.

Que de igual manera, y de acuerdo con el párrafo primero de la normatividad en cita, se establece como sanción, la imposición de multas de treinta (30) salarios mínimos diarios legales vigentes, contra las personas naturales o jurídicas que incumplan el requerimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente por cada vehículo, previo procedimiento administrativo sancionatorio ambiental.

Que en el caso concreto, conforme a la documentación obrante en las presentes diligencias administrativas, se observa que el día 29 de noviembre de 2007, la empresa COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES, fue enterada del requerimiento realizado por la Oficina de Control de Emisiones y Calidad del Aire de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, para que presentara los vehículos relacionados en dicho oficio,

40

40



con el fin de efectuar una prueba de emisiones de gases, haciéndole saber que el incumplimiento a dicho requerimiento, daría lugar a la imposición de las medidas preventivas y sanciones consagradas en el parágrafo primero de la Resolución 556 de 2003, en concordancia con el Decreto 1594 de 1984.

Que en cumplimiento al Artículo Octavo de la Resolución 556 de 2003, la empresa COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES, recibió el oficio de requerimiento con una semana de antelación al inicio de la programación señalada en el oficio.

Que adicional a lo anterior, los vehículos solicitados para su presentación mediante el requerimiento No. 2007EE38342 del 27 de noviembre de 2007, no han sido requeridos en el último año, requisito exigido por la Resolución 556 de 2003.

Que mediante radicado identificado con el radicado No. 2008ER6077 del 12 de febrero de 2008, el Gerente de la empresa manifestó que los vehículos identificados con las placas BLG-843, BKV-610, BLU-332, BJU-750, SQK-185, BJJ-792, BGG-828, BGK-131, BDG-849, SOC-071, SQL-035, BLV-870, VKH-200, SGG-987, BFX-241, SYT-827, SKZ-803, BKU-610 y SKL-742 no pertenecen a la flota de la empresa COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES, lo cual no ha sido verificado por la Oficina de Control de Emisiones y Calidad del Aire de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, razón por la cual esta Dirección considera que tal afirmación tiene que ser investigada y comprobada por la mencionada Oficina.

Que adicional a lo anterior, no justificó la inasistencia de los vehículos identificados con las placas QHV-113, BGL-166, SKM-430 y CIH-997, tal como lo señala el Concepto Técnico No. 1731 del 30 de enero de 2008.

Que hechas las anteriores consideraciones de orden jurídico y legal, y teniendo en cuenta los resultados obrantes en el Concepto Técnico No. 1731 del 30 de enero de 2008, emitido por la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental de esta Secretaría, y dando aplicación a lo establecido en el Artículo 197 del Decreto 1594 de 1984, este Despacho encuentra pertinente abrir investigación ambiental y formular pliego de cargos, en contra de la empresa de transporte **COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES**, identificada con NIT. 830.092.800-0, por su presunto incumplimiento al Artículo Octavo de la Resolución 556 de 2003 *"Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en fuentes móviles"*.

Que de conformidad con el Artículo Octavo de la Carta Política es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Que el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra entre otras cosas, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Así mismo, establece que es

4P
e



deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Que a su vez, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa: "*El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.*

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..."

Que igualmente, el Ordenamiento Constitucional señala en su Artículo 95, que toda persona está obligada a cumplir con la Constitución y las Leyes y dentro de los deberes de la persona y el ciudadano, establece en su numeral Octavo el de: "*Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano*". (Subrayado fuera del texto).

Que por su parte el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993, estableció que los Municipios, Distritos o Áreas Metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 83 de la Ley 99 de 1993, esta Entidad está investida de funciones policivas para la imposición y ejecución de las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por la ley, que sean aplicables según el caso.

Que por su parte los Artículos 84 y 85 de la misma disposición legal, establecen que cuando ocurriere violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables, las autoridades ambientales, impondrán mediante acto administrativo motivado las sanciones y medidas preventivas, según el tipo de infracción y la gravedad de la misma.

Que a su vez, cabe hacer referencia a lo establecido en el inciso segundo del Artículo 107 de la Ley 99 de 1993, según el cual, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

Que en la actualidad el Decreto 1594 de 1984, no ha sido modificado o revocado por normatividad alguna, por lo cual es el pertinente para adelantar las investigaciones respectivas en materia ambiental así como por el incumplimiento de las normas vigentes

HP

©



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

3 2 5 4

en la misma materia o de requerimientos en actuaciones jurídicas emanadas de las autoridades ambientales competentes.

Que conforme lo establece el Artículo 197 del Decreto 1594 de 1984, el procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud o información de funcionario público, por denuncia o queja presentada por cualquier persona, como consecuencia de haberse tomado previamente una medida preventiva o de seguridad.

Que de igual forma, establece el Artículo 202 del Decreto antes mencionado, que conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso, la autoridad ambiental debe ordenar la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

Que el Artículo 203 ibídem, consagra que en orden a la verificación de los hechos u omisiones, podrán realizarse todas las diligencias que se consideren necesarias, tales como visitas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, pruebas químicas o de otra índole.

Que el Artículo 205 del Decreto 1594 de 1984 estipula que realizadas las anteriores diligencias, mediante notificación personal, se pondrán en conocimiento del presunto infractor los cargos que se le formulen y el presunto infractor podrá conocer y examinar el expediente de la investigación.

Que el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984 estipula que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al de la notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar sus descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes.

Parágrafo: *La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán de cargo de quien las solicite...*

Que el Decreto 948 de 1995 contiene el reglamento de prevención y control de la contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 68 de este Decreto, en concordancia con lo señalado en el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, corresponde al Distrito en relación con la prevención y control de la contaminación del aire, dictar normas para la protección del aire dentro de su jurisdicción, ejercer funciones de control y vigilancia de los fenómenos de contaminación atmosférica e imponer las medidas correctivas que en cada caso correspondan, así como implementar a prevención de las demás autoridades competentes, las medidas preventivas y sanciones que sean del caso por la infracción a las normas de emisión de fuentes móviles dentro de su jurisdicción.



Que el Artículo Octavo de la Resolución 556 de 2003 establece que: "...El Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente -DAMA- o la Secretaría de Tránsito y Transporte podrán solicitar a las entidades oficiales, privadas, empresas de transporte público o propietarios particulares, la presentación de alguno o algunos de los vehículos de su propiedad, contratados o afiliados, para efectuar una prueba de emisión de gases, en la fecha y lugar que lo disponga. El requerimiento se comunicará por lo menos con una semana de antelación. El mismo vehículo no podrá ser citado más de dos veces durante un año..."

Que adicional a los anteriores fundamentos legales, es importante tener en cuenta los siguientes pronunciamientos de tipo jurisprudencial aplicables al caso en particular, así:

Que es de resaltar que la constitucionalización de la función ecológica de la propiedad, encuentra sus orígenes en los conceptos de función social (Arts. 58 y 333 C.P.), desarrollo sostenible (Art. 80 C. P. y 3 de la Ley 99 de 1993), y en el principio de la solidaridad intergeneracional (Art. 3 de la Ley 99 de 1993), y es una de las expresiones de protección al medio ambiente que llevaron a determinar por parte de la doctrina y la jurisprudencia, que nuestra Carta contiene una verdadera "Constitución Ecológica":

(...)

La Corte ha precisado que esta Constitución ecológica tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión: de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (CP Art. 8). De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales (CP Art. 79). Y, finalmente, **de la constitución ecológica derivan un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares**¹. Es más, en varias oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, "unos **deberes calificados de protección**"². Igualmente, y conforme a lo señalado por los actores, la Corte también ha precisado que la Carta constitucionaliza uno de los conceptos más importantes del pensamiento ecológico moderno, a saber, la idea según la cual el desarrollo debe ser sostenible.

Ahora bien, en la época actual, se ha producido una "ecologización" de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso **sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo**

¹ Ver, entre otras, las sentencias T-411 de 1992, C-058 de 1994, C-519 de 1994, C-495 de 1996 y C-535 de 1996.

² Ver, entre otras, las sentencias C-328 de 1995 y C-535 de 1996.



cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios.^{2b} (Resaltados fuera de texto).

Que adicionalmente la Corte Constitucional en sentencia T-1527 de 2000, determinó:

"...Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debe realizar su respectiva actividad económica dentro de los precisos marcos que le señala la ley ambiental, los reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del manejo del recurso o de su conservación. El particular al realizar su actividad económica tiene que adecuar su conducta al marco normativo que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad ambiental. (...) Dentro de este contexto, en la preservación y protección del medio ambiente, los particulares tienen una especial responsabilidad, cuando quiera que con el ejercicio de la libertad de empresa o la realización de una actividad económica amenacen derechos fundamentales, pues su ejercicio se limita al bien común..."

Que de conformidad con la Sentencia T-536 del 23 de septiembre de 1992, de la Sala Sexta de Revisión Corte Constitucional, con ponencia del Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, fue reiterativa sobre el tema ambiental y el alcance del mismo a partir de la interpretación de la Constitución Política:

"...Síntesis: El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencias, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a los pueblos, garantizándoles su supervivencia. Existen unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasados constituyen un perjuicio para el medio ambiente y la vida, que pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer unos correctivos..."

Que de otra parte, el Artículo 101 del Acuerdo 257 del 30 de Noviembre de 2006, expedido por el Honorable Concejo de Bogotá, dispuso transformar el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera.

³ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C - 126 de 1998. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.



Que mediante el Decreto Distrital 561 del 29 de diciembre de 2006, expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá, se le asignó a esta Secretaría entre otras funciones generales, la de ejercer la autoridad ambiental en el Distrito Capital.

Que de conformidad con lo contemplado en los literales a) y f) del Artículo Primero de la Resolución 0110 de fecha 31 de enero de 2007, el Secretario Distrital de Ambiente, delega en el Director Legal Ambiental, entre otras la función de expedir los actos administrativos de carácter sancionatorio y de formulación de cargos, así como la decisión de fondo tomada frente a éstos y al recurso que contra la misma se interponga.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Abrir investigación administrativa sancionatoria de carácter ambiental a la empresa de transporte **COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES**, identificada con NIT. 830.092.800-0, domiciliada en la Calle 67 B No. 62-21, piso 2, Localidad de Barrios Unidos de esta Ciudad, por su presunto incumplimiento a la normatividad ambiental vigente, concretamente al Artículo Octavo de la Resolución 556 de 2003.

ARTÍCULO SEGUNDO. Formular a la empresa de transporte **COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES**, identificada con NIT. 830.092.800-0, domiciliada en la Calle 67 B No. 62-21, piso 2, Localidad de Barrios Unidos de esta Ciudad, el siguiente pliego de cargos:

CARGO ÚNICO:

Incumplir presuntamente con el Artículo Octavo de la Resolución 556 de 2003, al no presentar los vehículos identificados con las placas QHV-113, BGL-166, SKM-430 y CIH-997, en la fecha y hora señalados en el requerimiento No. 2007EE38342 del 27 de noviembre de 2007.

ARTÍCULO TERCERO. Por parte de la Oficina de Control de Emisiones y Calidad del Aire de la Dirección de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental, establecer si los vehículos identificados con las placas BLG-843, BKV-610, BLU-332, BJU-750, SQK-185, BJJ-792, BGG-828, BGK-131, BDG-849, SOC-071, SQL-035, BLV-870, VKH-200, SGG-987, BFX-241, SYT-827, SKZ-803, BKU-610 y SKL-742, pertenecen a la flota vehicular de la empresa COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES.



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital
Ambiente

3 2 5 4

ARTÍCULO CUARTO. Notificar el contenido de la presente Resolución al Representante Legal de la empresa de transporte **COOPERATIVA COOTRANSINTEGRALES**, identificada con NIT. 830.092.800-0, señor **MARIO FERNANDO ROJAS VARGAS**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.351.148, o a quien haga sus veces, o a su apoderado debidamente constituido, en la Calle 67 B No. 62-21, piso 2, Localidad de Barrios Unidos de esta Ciudad.

ARTÍCULO QUINTO. De conformidad con el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984, el presunto infractor cuenta con diez (10) hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la presente providencia, para presentar los descargos por escrito, personalmente o por medio de apoderado y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que considere pertinentes y sean necesarias.

PARÁGRAFO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas serán a cargo de la parte solicitante.

ARTÍCULO SEXTO. Remitir copia a la Alcaldía Local de Barrios Unidos de esta Ciudad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Publicar la presente Resolución en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO OCTAVO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en Bogotá D.C., a los **15** SEP 2008

ALEXANDRA LOZANO VERGARA
Directora Legal Ambiental JP

Proyectó: Leonardo Rojas Cetina
Revisó: Clara Patricia Álvarez Medina
C.T. 1731 del 30/01/2008
COOTRANSINTEGRALES